



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA

Tunja, doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo
Demandante: Libardo Alvarado Romero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP
Radicado: 15001 33 33 007 2018 00162 00

1. Asunto

El Despacho procede a estudiar la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en el trámite de la audiencia del artículo 372 del CGP, llevada a cabo el diez (10) de diciembre dos mil diecinueve (2019).

2. Contenido del acuerdo

El acuerdo al que llegaron las partes, de conformidad con lo manifestado por la apoderada de la entidad demandada, y lo estipulado en certificación expedida por la secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa de la Entidad, obrante en folios 234 a 242, consiste en:

*"...reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 177 del C.C.A. ordenados por el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Tunja de fecha 23 de septiembre de 2010, confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión de Descongestión No. 10 Despacho No. 5 mediante fallo de 29 de noviembre de 2012, el cual quedó ejecutoriado el día 12 de febrero de 2013, y al cual se dio cumplimiento mediante la Resolución No. RDP 054476 de fecha 29 de noviembre de 2013, modificada con la Resolución No. RDP 014421 de fecha 5 de abril de 2017 y Resolución RDP 020912 del 17 de julio de 2019. Teniendo en cuenta que la liquidación proyectada por la Subdirección de Nómina de Pensionados, que arrojó un valor de **\$9.039.248.11, (al cual se le deduce el valor de \$3.826.400.08, correspondiente a un pago efectivamente realizado el 2 de julio de 2019);** por tanto se efectuará un único pago por el valor de \$5.212.848.03, tal y como lo ordena la Resolución RDP 020912 del 17 de julio de 2019. Dicho pago se realizará una vez se realice la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público."*

Se reitera que este pago se realizará de conformidad con las reglas que para el pago de intereses del artículo 177 del C.C.A fueron establecidas a través de la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de fecha veinte (20) de octubre

de 2014. Radicado 52001233100020010137102 M.P Enrique Gil Botero, y que fueron acogidas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, en sesiones del 28 de septiembre y 03 de octubre de 2018 (acta 1928)

Se solicita un término de dos (2) meses después de aprobada la conciliación para agotarse las etapas de liquidación por parte del área de nómina de la entidad y posterior ordenación del gasto por parte de la Subdirección Financiera, previa asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, para cubrir este pago, y siempre y cuando se aporten los siguientes documentos:

Teniendo en cuenta que la parte ejecutante elevó petición el 28 de julio de 2014, la normatividad aplicable es el Decreto 768 de 1993 modificado por el Decreto 818 de 1994, que ajustados al tema pensional de la UGPP, consigna, en forma relevante que la interesada allegue, si aún no lo hubiere hecho, los siguientes documentos:

- *Si la petición se presentó entre el 22 de abril de 1993 hasta el 22 de diciembre de 2015, la normatividad aplicable es el Decreto 768 de 1993 modificado por el Decreto 818 de 1994, que ajustados al tema pensional de la UGPP, consigna, en forma relevante, los siguientes requisitos:*
 - a) Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 818 de 1994 Primera copia auténtica de la respectiva sentencia de segunda instancia, junto con la constancia de notificación y fecha de ejecutoria. Se exigirá la sentencia de prime instancia cuando el fallo de segundo grado remita a las decisiones adoptadas en la primera instancia sin hacer mención expresa a las órdenes emitidas en la primera instancia.*
 - b) De ser el caso, los poderes que se hubieren otorgado, los cuales deben reunir los requisitos de ley.*
 - c) Los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados.*
 - d) Los demás documentos que por razón del contenido de la condena, sean necesarios para calcular su valor...*

Es de reiterar que dicho acuerdo se realizó con base en la recomendación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, según acta de 6 de diciembre de 2019, que obra a folios 234 a 242 del expediente, y que la fórmula en los términos antes expuestos, fue estudiada y aceptada por la apoderado de la parte demandante, siendo esto manifestado de forma expresa en audiencia del 10 de diciembre de 2019 (f. 231)

3. Marco normativo aplicable a la conciliación en sede judicial

El artículo 70 de la Ley 446 de 1998, señala frente a la conciliación en lo contencioso administrativo:

"Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:

"Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes

legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1o. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.

Parágrafo 2o. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario." (Resaltado el Despacho)

A su vez, el numeral 6 de su artículo 372 del CGP, aplicable por disposición expresa de los artículos 299 y 306 de la Ley 1437 de 2011, en materia de procesos ejecutivos, señala lo siguiente:

Artículo 372. Audiencia inicial. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: (...)

6. Conciliación. Desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. (...)” (Negritas nuestras)

Adicionalmente, el juez administrativo tiene a su cargo la valoración de legalidad respecto del acuerdo conciliatorio al que llegan las partes, por lo cual deberá darle aprobación siempre que no incurra en las falencias a que refiere el artículo 65A del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, incorporado por el inciso tercero del artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que señala:

"Artículo 65A. (...)La autoridad judicial impondrá el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público.(...)”

Las anteriores normas sitúan a las partes en la posibilidad de conciliar sus diferencias directamente en cualquier etapa del proceso, inclusive, insta al Juez para que exhorte a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio en pro de garantizar los derechos sustantivos, facilitar mecanismos de autocomposición que a la postre proveen por la descongestión del sistema judicial, e imponen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la función de valorar la legalidad de este tipo de acuerdos.

4. Cumplimiento de los presupuestos para aprobar la conciliación

4.1. La debida representación de las personas que concilian y la capacidad o facultad que tengan los representantes o conciliadores para conciliar

En el presente proceso, las partes poseen capacidad jurídica y procesal para comparecer al proceso.

Lo anterior, toda vez que la parte ejecutante actuó a través de su apoderado judicial, la Abogada **Juliana María Martínez Guerra**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.049.254.425 y tarjeta profesional N° 321.181 del C. S. de la J., con facultad expresa para conciliar, de acuerdo con el poder de sustitución visible a folio 232 del expediente y el poder principal obrante a folio 3.

Por su parte, la entidad demandada estuvo representada por la abogada **María Alejandra Dueñas**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.049.623.065 y T.P. N° 239.270 del C.S. de la J., a quien le fue sustituido el poder según memorial obrante a folio 233, facultada expresamente para conciliar de acuerdo con la recomendación del Comité de Conciliación de la UGPP expedida el 6 de diciembre de 2019, y en la que constan las condiciones de la fórmula de conciliación propuesta.

Así pues, encuentra el Despacho que se acredita la debida representación y la capacidad o facultad para conciliar de las partes que suscriben el acuerdo conciliatorio.

4.2. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes

El asunto es susceptible de ser conciliado en los términos pactados, comoquiera que se trata de un conflicto de carácter particular y contenido económico, atendiendo a que las pretensiones elevadas por la ejecutante se relacionan con el cumplimiento de un fallo en el que se ordenó el pago de intereses moratorios, con ocasión de la reliquidación de su pensión de vejez, por tanto, el arreglo no versa sobre derechos irrenunciables de la ejecutante, sino a lo relativo al monto económico a reconocer por concepto de intereses moratorios a su favor y, en consecuencia, se transó respecto a obligaciones meramente monetarias, manteniendo los derechos prestacionales intactos, razón por la cual, se encuentra que el asunto es conciliable

Así las cosas, al tratarse de derechos de contenido netamente económico, es plausible realizar acuerdos conciliatorios sobre las pretensiones que se invocan a través de la ejecución que nos convoca.

4.3. Que no haya operado la caducidad

Como se verificó en el mandamiento de pago, la obligación contenida en el título ejecutivo, en que se basa la presente ejecución, es actualmente exigible, por cuanto la sentencia cobró ejecutoria el **12 de febrero de 2013** (fl. 7), y el artículo 177 del CCA prevé que las condenas serán ejecutables dieciocho (18) meses después de su ejecutoria; para el caso, este término comenzó a correr a partir de las **cinco de la tarde (05:00 pm), del 12 de febrero de 2013 y hasta las cinco de la tarde (05:00 pm), del 12 de agosto de 2014**. Así que una vez transcurrido este término es posible adelantar la respectiva ejecución de lo debido, lo cual se dio el **25 de septiembre de 2018**, cuando se radicó la presente demanda (fl. 68), concluyéndose que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el

requisito de ser exigible actualmente, sin que haya transcurrido el término de cinco (5) años para que caducara la acción.

4.4. Que lo reconocido esté debidamente respaldado en la actuación

En el presente proceso, al momento de librar el mandamiento ejecutivo, se verificó el respaldo del reconocimiento patrimonial, habida cuenta que obran en el expediente las siguientes pruebas:

- Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja del 23 de septiembre de 2010, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2009 00231 00 (fs. 8 a 21).
- Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 29 de noviembre de 2012, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2009 00231 00 (fs. 24 a 43).
- Constancia de ejecutoria de la sentencia a partir del 12 de febrero de 2013 a partir de las 5:00 p.m. (f. 7).
- Petición radicada ante la UGPP el 19 de noviembre de 2013, por la cual se solicitó el cumplimiento del fallo descrito (fl. 46).
- Copia de la Resolución N° RDP 054476 de 29 de noviembre de 2013, expedida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, por la cual se reliquidó una pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja (fls. 50-52)
- Copia de la Resolución N° RDP 0144221 de 05 de abril de 2017, expedida por la UGPP, mediante la cual se modificó el numeral 6 de la Resolución 054476 de 29 de noviembre de 2013 y, en consecuencia, dispuso el pago de la indexación del artículo 178 del CCA y el reconocimiento y pago de intereses moratorios en los términos del artículo 177 *ibídem*, a favor del señor Libardo Alvarado Romero (f. 61-65)
- Copia del cálculo del fallo efectuado por la UGPP (f. 67).

La parte ejecutante aportó posteriormente copia de la Resolución RDP 020912 del 17 de julio de 2019, con la cual modificó la Resolución N° RDP 0144221 de 05 de abril de 2017 (fs. 208 a 213).

Adicionalmente, la entidad ejecutada allegó al proceso certificación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, liquidación de lo adeudado por concepto de intereses moratorios, de conformidad con el artículo 177 de CCA, efectuada por la Subdirección de Nómina de la entidad (fls. 234-242) y el informe de

depósito judicial No. 400001503461734 de fecha 2 de julio de 2019 a órdenes del presente proceso por valor de \$3.826.400,08, el cual fue constituido a órdenes del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, como consta a folio 206 y se complementa con lo informado por la UGPP a través de oficio No. 1630 del 18 de julio de 2019 (f. 215).

En ese orden de ideas, se logra constatar que lo reconocido se encuentra debidamente respaldado en la actuación.

4.1 Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público

La conciliación lograda en la presente instancia judicial, no puede estimarse violatoria de la ley, ni lesivo del patrimonio público, en la medida que lo pretendido por el ejecutante es el cumplimiento de un fallo judicial que se encuentra en firme contra la entidad ejecutada, en ese orden de ideas, la Administración, en sede de conciliación judicial, actuó en cumplimiento de un deber legal, adoptando medidas necesarias para asumir y dar cumplimiento a una obligación insoslayable, como es la impuesta en fallo judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada y que, por tanto, resulta inmodificable.

Entonces, la propuesta de conciliación planteada por la entidad implica la salvaguarda del patrimonio público, ya que producto del mismo, se concretó la suma a reconocer a la accionante, la cual resultó menor a la dispuesta al momento de librar el mandamiento de pago, pues ya no se verá obligada a cancelar los dineros correspondientes a la indexación sobre los intereses moratorios.

Así las cosas, al considerar que el asunto objeto de examen es de aquellos de carácter conciliable, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para la procedencia del acuerdo suscrito entre las partes, el Despacho procederá a impartirle aprobación.

5. Otros Asuntos

Se reiterará al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, la solicitud de conversión del depósito judicial No. 400001503461734 de fecha 2 de julio de 2019, realizada mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2019, para que se ponga a órdenes de este Despacho y realizada la conversión, se autoriza la entrega del título al señor Libardo Alvarado Romero o su apoderada de contar con la facultad de recibir.

Por lo expuesto, la Juez Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar, con efecto de cosa juzgada, el acuerdo conciliatorio logrado entre el señor **Libardo Alvarado Romero**, a través de su apoderada judicial, en calidad ejecutante y la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP**, en calidad de ejecutada, realizada ante este Despacho en el trámite de la audiencia de que trata el artículo 372 del CGP.,

celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), consistente en lo siguiente:

*"...reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 177 del C.C.A. ordenados por el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Tunja de fecha 23 de septiembre de 2010, confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión de Descongestión No. 10 Despacho No. 5 mediante fallo de 29 de noviembre de 2012, el cual quedó ejecutoriado el día 12 de febrero de 2013, y al cual se dio cumplimiento mediante la Resolución No. RDP 054476 de fecha 29 de noviembre de 2013, modificada con la Resolución No. RDP 014421 de fecha 5 de abril de 2017 y Resolución RDP 020912 del 17 de julio de 2019. Teniendo en cuenta que la liquidación proyectada por la Subdirección de Nómina de Pensionados, que arrojó un valor de **\$9.039.248.11**, (al cual se le deduce el valor de **\$3.826.400.08**, correspondiente a un pago efectivamente realizado el 2 de julio de 2019); por tanto se efectuará un único pago por el valor de **\$5.212.848.03**, tal y como lo ordena la Resolución RDP 020912 del 17 de julio de 2019. Dicho pago se realizará una vez se realice la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*

(...)

Se solicita un término de dos (2) meses después de aprobada la conciliación para agotarse las etapas de liquidación por parte del área de nómina de la entidad y posterior ordenación del gasto por parte de la Subdirección Financiera, previa asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, para cubrir este pago, y siempre y cuando se aporten los siguientes documentos:

(...)

- a) Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 818 de 1994 Primera copia auténtica de la respectiva sentencia de segunda instancia, junto con la constancia de notificación y fecha de ejecutoria. Se exigirá la sentencia de prime instancia cuando el fallo de segundo grado remita a las decisiones adoptadas en la primera instancia sin hacer mención expresa a las órdenes emitidas en la primera instancia,*
- b) De ser el caso, los poderes que se hubieren otorgado, los cuales deben reunir los requisitos de ley,*
- c) Los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados,*
- d) Los demás documentos que por razón del contenido de la condena, sean necesarios para calcular su valor..."*

SEGUNDO.- Esta providencia, así como el acuerdo conciliatorio obrante a folios 234 a 242, y los registros del audiencia inicial de 10 de diciembre de 2019 (acta y registro en video obrantes a folios 231 y 243) prestan mérito ejecutivo, y ponen fin a este proceso haciendo tránsito a cosa juzgada respecto del objeto de este litigio.

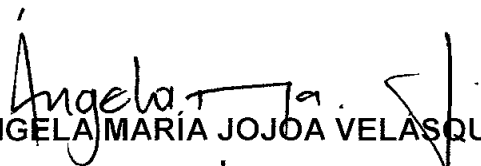
TERCERO.- En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y de la fórmula de conciliación avalada, obrante a folios 234 a 242, con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del CGP.

CUARTO.- Declarar terminado el proceso de la referencia, por conciliación total de las pretensiones.

QUINTO.- Por Secretaría, reiterar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, la solicitud de conversión del depósito judicial No. 400001503461734 de fecha 2 de julio de 2019, para que se ponga a órdenes de este Despacho y realizada la conversión, se autoriza la entrega del título al señor Libardo Alvarado Romero o su apoderada de contar con la facultad de recibir.

SEXTO.- Ejecutoriado el presente auto, por Secretaría, archivar el expediente dejando las constancias y anotaciones a que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELASQUEZ
Juez

SEAP

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>62</u> De Hoy <u>13 de diciembre de 2019</u> A LAS <u>8:00</u> a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO